

# Patricia Lara Salive

ADIÓS A LA GUERRA

Diseño de colección: departamento de diseño Grupo Planeta  
Imagen de cubierta: Santiago Harker

© 2019, Patricia Lara Salive  
© 2019, Editorial Planeta Colombiana S. A.  
Calle 73 N.º 7-60, Bogotá

ISBN 13: 978-958-42-8189-0  
ISBN 10: 958-42-8189-5

Primera edición impresa en esta colección: septiembre de 2019

Impreso por: Editorial Nomos S. A.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del *copyright*.

*Para Federico Gómez Lara, mi hijo, mi editor,  
mi columnista preferido.*





## AGRADECIMIENTOS

**A**gradezco, en primer lugar, al gran fotógrafo documentalista Santiago Harker, su acompañamiento permanente en la elaboración de este libro. Espero que, muy pronto, este texto pueda publicarse al lado de las espléndidas fotografías que Santiago elaboró durante el proceso de recopilación de información para la escritura de este texto.

Agradezco, también, al periodista Hernán Onatra, su valioso apoyo en la realización de entrevistas y del resumen de los acuerdos; y a Ester Morón y a Alberto Cabrera, su hospitalidad en La Habana y su compañía en nuestros recorridos por la isla; y a Yesid Reyes, su asesoría para la comprensión de los aspectos jurídicos del acuerdo.

Agradezco, igualmente, el granito de arena que pusieron tantas otras personas que de una manera u otra volvieron realidad este libro.

A todos, ¡MUCHAS GRACIAS!



## INTRODUCCIÓN

**H**ace un año, cuando le entregué a Planeta la introducción a la primera edición de *Adiós a la Guerra*, se daba por segura la elección del Presidente Iván Duque, miembro del partido Centro Democrático, liderado por el expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez, enemigo del Acuerdo de Paz firmado en La Habana entre las FARC y el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.

En ella decía que se cernían nubarrones sobre el futuro del proceso de paz, pues Duque prometía reformar los Acuerdos de La Habana, especialmente en lo relacionado con la Justicia Especial para la Paz (JEP), pero sin contemplar lo que era obvio: que cualquier modificación la acordaría primero con la otra parte signataria del pacto de paz, es decir, con las FARC. Agregaba que los nubarrones podrían avizorar una tormenta si se consideraba que, como se había previsto, quedaban disidencias, o desertores, como los llamaban los miembros de las FARC, que no se habían acogido a los acuerdos, y que a varias zonas del país habían llegado peligrosos carteles mexicanos del narcotráfico que operaban con el apoyo no solo de esas disidencias sino de otros reductos de guerrilleros, paramilitares y miembros de toda clase de bandas armadas. Añadía que el jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, había renunciado a su curul en el Senado porque consideraba que carecía de garantías, apoyado en el hecho de que la agencia

anti drogas de Estados Unidos, DEA, había solicitado en extradición a Jesús Santrich, antiguo comandante de las FARC, muy cercano a Márquez, acusado de que, después de firmado el Acuerdo de Paz, se había propuesto enviar 10 kilos de cocaína a ese país. Añadía que Duque había reiterado que, si la decisión final llegaba a sus manos, él extraditaría a Santrich, lo cual podría tener un efecto devastador en el ánimo de los excombatientes. Agregaba que Santrich había anunciado que no se dejaría extraditar; que había emprendido una huelga de hambre de casi 40 días, la cual había suspendido gracias a que el Padre Francisco De Roux, Presidente de la Comisión de la Verdad, lo había convencido de que no se muriera antes de revelar su verdad sobre el conflicto. Me preguntaba ¿qué impacto tendría en Colombia la muerte por inanición de Santrich? Y me respondía: nadie lo sabe.

Sin embargo, en la Introducción planteaba igualmente que existía la posibilidad de que no se perdiera el esfuerzo monumental que el Presidente Juan Manuel Santos había hecho para acabar con 70 años de guerra. Decía que Duque podía asumir de manera eficaz su primera responsabilidad como Jefe de Estado, que no era otra que garantizar la paz del país. Y agregaba que, para conseguirlo, podía continuar transitando el camino trazado por Santos, el cual había sido el único que, de manera palpable, había conseguido aproximarnos a la paz.

Finalizaba la introducción diciendo algo sobre lo cual, con el paso del tiempo, cada vez me reafirmo más: “no podía quedar completo este libro si antes de ponerle punto final, no dijera, llena de emoción y de nostalgia, ¡gracias Presidente Santos! Gracias por empeñarse en que nuestros hijos y nuestros nietos



puedan vivir en una Colombia sin miedo, donde la guerra sea una pesadilla del pasado, donde la vida empiece a ser sagrada y donde, por fin, aprendamos a vivir en paz”.



Pues bien, a un año de haber escrito lo anterior, puedo decir que los nubarrones amenazaron con volverse tormenta, pero que la tempestad no se produjo gracias a que funcionó la institucionalidad y a que la Corte Constitucional y los partidos de centro y de izquierda, que conforman la mayoría del Congreso (el Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical, el Verde, el Polo Democrático, el partido FARC y los movimientos Decentes y Colombia Humana), asumieron una posición vertical en defensa de la Justicia Especial para la Paz, pilar fundamental del Acuerdo, y no le dieron vía libre a las objeciones que el Presidente Iván Duque, quizás forzado por Uribe, le hizo a la ley estatutaria de la JEP, las cuales, de haberse aprobado, habrían incrementado la inseguridad jurídica de los excombatientes y habrían minado definitivamente su confianza en el proceso de paz. Es más, la derrota de Duque fue estruendosa porque, para hacer pasar sus objeciones a la ley estatutaria de la JEP, apeló a métodos inverosímiles: por ejemplo, propició o permitió que se les ofrecieran dádivas a los parlamentarios para que las aprobaran o abandonaran el recinto antes de las votaciones y, así, desbarataran el quórum; patrocinó la tesis de su partido que alteraba el número de senadores requerido para hacer mayoría; y guardó silencio frente a las presiones ejercidas por el Embajador de Estados Unidos sobre los congresistas para que

votaran a favor de las objeciones, y sobre los magistrados de la Corte Constitucional que tenían que decidir si la mayoría obtenida en el Senado había sido suficiente para hundirlas, o no. Y después de que las objeciones fueron hundidas en ambas cámaras, Duque sufrió una nueva derrota porque convocó a todos los partidos, salvo a los de oposición, para hacer un pacto político con el propósito principal de modificar la JEP, pero los partidos de centro no aceptaron que el pacto excluyera a los opositores y el tal pacto también naufragó. Por último vino la sentencia de la Corte Constitucional que estableció que, en efecto, como sostenían los partidos de centro y de izquierda, el Senado había hundido las objeciones con una mayoría incuestionable de 47 votos. Después, al Presidente no le quedó más remedio que sancionar la ley estatutaria de la JEP de modo que, por fin, con un retardo de más de dos años, la justicia transicional empezó a operar a todo vapor.

Sin embargo, la situación de los Acuerdos de Paz no es fácil: el caso Santrich copó la atención del país durante varios meses: la JEP negó su extradición en primera instancia, y el Procurador General apeló esa decisión ante la Sala de Revisión de la misma JEP. Después, la Fiscalía, de manera extemporánea, presentó un nuevo video que indicaría que el delito del cual los Estados Unidos acusan a Santrich, habría sido cometido después de la firma del Acuerdo de Paz. También aparecieron unas declaraciones de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, convertido en colaborador de la DEA, en las que inculpa a Santrich y determina que la fecha en que se habría producido el delito fue posterior a la firma de los acuerdos. Ello habría implicado que la JEP debía aprobar su extradición

ante la apelación presentada por la Procuraduría. Pero la Corte hubiera podido, no obstante, decidir que Santrich no fuera extraditado porque prevalecía que aquí la justicia y las víctimas conocieran la verdad. Por otra parte, mientras él estaba preso, el Consejo de Estado le restituyó su curul en la Cámara de Representantes. Ello hizo que la Corte Suprema pidiera su caso, por tratarse de un aforado. Luego decretó su libertad a fines de mayo y lo citó a rendir indagatoria el 9 de julio. Entonces el excomandante de las FARC se posesionó como congresista. Y asistió a un par de sesiones. Pero a pesar de que había dicho muchas veces que era inocente y que comparecería ante la Corte, una noche de fines de junio, estando cerca de la frontera con Venezuela, se esfumó y no ha vuelto a saberse de él<sup>1</sup>. Se especula que pueda estar en Venezuela con Márquez y algunos mandos medios de las antiguas FARC, quienes también se han esfumado como por arte de magia.

El engaño de Santrich, quien ahora es prófugo de la justicia, fue criticado por todo el país, empezando por la dirigencia del partido FARC. Y su fuga, desafortunadamente, golpeó a las Cortes que lo rodearon de garantías. Y les dio argumentos a los enemigos del proceso...

Por otra parte, si bien como afirma el expresidente Santos, el proceso está blindado jurídicamente y la mayoría del Congreso apoya los Acuerdos de Paz, a muchos excombatientes les preocupa la inseguridad jurídica que les genera el que hayan solicitado en extradición a Santrich lo cual, para ellos, es producto de un montaje realizado por la DEA, y les causa pánico

---

1 N. de la A.: Por lo menos hasta hoy, 17 de julio, cuando entrego este texto a la editorial.

el hecho de que, a fines de Junio, hayan matado a cerca de 140 exguerrilleros de las FARC y, hasta Abril, según la ONG Indepaz, después de la firma del Acuerdo, hayan asesinado a 702 líderes sociales y defensores de derechos humanos. (Esta última cifra, según la Defensoría del Pueblo, era de 462 a fines de febrero).

Todo ello ha llevado a que varios dirigentes del partido FARC, empezando por Iván Márquez, jefe de su equipo negociador, se hayan escondido y quién sabe si alejado definitivamente del proceso. Y, probablemente, también se alejen otros, si Duque no opta, definitivamente, por defender y cumplir el Acuerdo de Paz, tal como fue firmado con las FARC.

Ahora, hay que reconocer que también ha habido acciones de Duque en pro de la paz: ha visitado 3 de las 26 zonas iniciales donde llegaron los desmovilizados; su gobierno les ha aprobado, según fuentes oficiales, 24 proyectos productivos por un poco más de 5 millones de dólares y 160 proyectos individuales más; y les ha dicho que se les van a prorrogar los suministros de alimentos, de servicios de salud y el apoyo financiero. Y, según una encuesta ordenada hace meses por la administración Duque, más del 75% de los ex guerrilleros ve con optimismo su proceso. Ello explicaría, por ejemplo, que varias desmovilizadas hayan tenido hijos y construido familias después de dejadas las armas.

Eso está bien. Pero hay que prender las alarmas porque las acciones o inacciones de Duque, en contra del proceso, pueden dinamitarlo: por ejemplo, además de su ataque a la JEP, ha desconocido como interlocutores a los dirigentes de las FARC; ha reducido drásticamente los presupuestos de la JEP,

la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas; no ha insistido en presentar ante el Congreso el proyecto de reforma constitucional que les otorga 16 curules a las víctimas, punto fundamental del Acuerdo de paz; solo ha reunido una vez la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia emanada del Acuerdo de Paz para crear estrategias que desarticulen las organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales, a pesar de que la ley lo obliga a convocarla mensualmente; no ha implementado el Decreto 660 de Abril del 2018, que establece que las comunidades diseñen, de acuerdo con las autoridades, sus propios planes de protección; y no ha empleado un lenguaje contundente para condenar y frenar los asesinatos de excombatientes de las FARC.

Pero no todo está perdido: la presión de la comunidad internacional es muy grande para que se implemente el acuerdo de paz; Duque hace lo posible por demostrarle al mundo que lo está implementando; y hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en pleno visitó el país a mediados de julio, se mostró satisfecho porque consideró que avanzaba la implementación del acuerdo, pero se manifestó inmensamente preocupado por los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las FARC, lo cual constituye hoy la verdadera amenaza del Acuerdo de Paz. Parar el genocidio, debería ser la prioridad de Duque.

Al Presidente todavía le queda una salida diferente a enterrar el Acuerdo de Paz: puede buscar una alianza con el sector mayoritario del Congreso, conformado por gran parte de los miembros de los partidos de centro y la totalidad de los de

oposición; comprometerse a fondo con el proceso de paz y lograr que pasen la reforma rural integral y los demás puntos del acuerdo que aún deben aprobarse en el Congreso; dar la batalla en las regiones contra las mafias y los poderes locales corruptos que no son ajenos a ellas; y ganar gobernabilidad pues, hasta ahora, la mayoría de sus proyectos ha naufragado.

Es decir que, para salvarse ante la historia, al Presidente de Colombia solo le queda una alternativa: gobernar para todo el país y no solo para su partido minoritario; y decidir, de una vez por todas, ser él, Iván Duque, el Presidente que puede consolidar la paz de Colombia, y no el que reviva la guerra.

FIN

## 70 AÑOS DE GUERRA

**T**rescientos mil muertos en la época de la llamada Violencia de los años cuarenta y cincuenta, entre liberales y conservadores. Ciento cincuenta mil en la guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902. Otros cuarenta mil caídos en las ocho guerras civiles del siglo XIX: la de 1812, la de 1839, la de 1851, la de 1854, la de 1860, la de 1876, la de 1884 y la de 1895.

Es decir que antes de que comenzara esta nueva guerra iniciada hace cincuenta años, ya habían muerto cerca de quinientos mil colombianos a manos de la violencia.

Y en esta última, que lleva medio siglo, han perdido la vida otros doscientos veinte mil compatriotas. Además de ellos, se han causado cerca de ocho millones de víctimas debido a los secuestros, desplazamientos y desapariciones forzadas. En fin, se trata de todo un cuadro dantesco de historia teñida de horror, el cual, parece, estamos *ad portas* de superar porque da la impresión de que, por fin, nos aburrimos de matarnos...

### EL PRINCIPIO

Para entender por qué nos hemos matado en este medio siglo hay que comprender por qué nos matamos antes: ocurrió que después de la derrota de los liberales en la cruenta guerra de los Mil Días, que no fue más que una prolongación de la guerra

de 1895, la cual a su vez fue una reacción a la guerra de 1885, se instauró la llamada hegemonía conservadora, que duró cerca de cuarenta años en los que hubo paz.

Hasta ese momento —y esa característica continuaría siendo el *leit motiv* de los conflictos armados en Colombia—, las guerras se explicaban por la exclusión de un partido del gobierno del otro. Por ello, tal vez la paz vivida en esos años de administraciones conservadoras surgió gracias a que, por una parte, en el mandato del general Rafael Reyes se le dio alguna participación a un sector del Partido Liberal y, por otra, el trauma dejado por la sangrienta guerra de los Mil Días había hecho que la gente escarmentara con la violencia. Sin embargo, en 1914 sucedió un crimen atroz: el asesinato, a hachazos, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, del general Rafael Uribe Uribe, héroe liberal de la guerra de los Mil Días que había colaborado con el gobierno de Reyes, de manos de dos carpinteros cercanos al sector republicano del Partido Liberal, Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal.

## LA REPÚBLICA LIBERAL

En 1930, el Partido Conservador se dividió y fue elegido presidente el liberal Enrique Olaya Herrera, con quien se inició el período de la República Liberal.

El liberalismo comenzó a separar a los conservadores de los cargos públicos en Boyacá y Santander. Entonces estos empezaron a organizar bandas de autodefensa para conservatizar esos mismos lugares.



Como dice el investigador Alfredo Molano en su documento *Fragments de la historia del conflicto armado*, los conservadores, que no tenían la costumbre de no ser dueños del poder, «no estaban dispuestos a perder en las urnas lo que habían ganado con las armas en la guerra de los Mil Días».

Además se vivía un período de agitación, pues el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán encabezaba luchas agrarias y sindicales, y el líder indígena Quintín Lame dirigía el clamor de los indios por la tierra. El Partido Comunista, por su lado, seguía un camino similar. «De tal suerte que armas, presupuesto nacional, ideología y tierra, es decir, todas las formas de lucha, se convirtieron en la mezcla explosiva que llamamos La Violencia —1925 y 1955—, afirma Molano.

En 1934 subió a la Presidencia el liberal Alfonso López Pumarejo, cuyo gobierno, denominado «el de la Revolución en Marcha», implantó reformas sociales de avanzada y creó colonias campesinas. El jefe conservador, Laureano Gómez, atemorizó a la gente con la historia de que iba a llegar el comunismo y lanzó su consigna de «hacer invivible la República».

En 1938 llegó a la Presidencia el liberal Eduardo Santos, que desaceleró las reformas. Se inició así la llamada «Pausa de Santos». Al comienzo de su gobierno, en enero de 1939, ocurrió la denominada «Matanza de Gachetá», en el oriente de Cundinamarca, durante una manifestación organizada por el Directorio Conservador: fue una balacera proveniente de un lugar indeterminado, con un saldo de ocho muertos y dieciocho heridos. Laureano dijo que se trataba de un contubernio

entre izquierdistas y la Policía. Luego el conservador Aquilino Villegas proclamó la legitimidad del atentado personal.

A partir de ahí, los conservadores atacaron a los liberales como pudieron. Y los liberales hicieron lo mismo.

En 1942 fue reelegido López Pumarejo, que en julio de 1944 enfrentó un intento fallido de golpe de Estado y, un año después, renunció a la Presidencia a raíz de un sonado debate en el Congreso. El designado liberal, Alberto Lleras, asumió el mando.

A las elecciones de 1946 se presentaron dos candidatos liberales: Gabriel Turbay, liberal de centro, apoyado por la maquinaria oficial, y Jorge Eliécer Gaitán, liberal de izquierda, apoyado por una gran parte del pueblo liberal que se llenaba de esperanza al escuchar la oratoria arrolladora de su jefe. El liberalismo, que era mayoría, perdió entonces el poder.

Iniciado el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez aparecieron los homicidios motivados por el sectarismo político. Además había agitación, huelgas, paros...

En noviembre de 1947 murió Gabriel Turbay. No había dudas de que Gaitán sería el próximo presidente de Colombia.

Entonces empezó a crecer la violencia oficial contra los liberales: se calcula que ese año murieron violentamente 14.000 colombianos. La violencia llegó hasta el punto de que el 7 de febrero de 1948 Gaitán reunió en Bogotá una manifestación imponente: decenas de miles de personas marcharon en absoluto silencio portando banderas enlutadas y Gaitán pronunció ante la multitud su famosa «Oración por la Paz».

«Impedid, señor presidente, la violencia. Solo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo», afirmó.

## EL FINAL DE LA ESPERANZA

Dos meses después, el 9 de abril de 1948, Gaitán cayó asesinado en el centro de Bogotá. El pueblo ajustició al autor material del crimen, pero los autores intelectuales nunca fueron descubiertos. Enardecida, la gente incendió sectores de la capital, saqueó almacenes, desocupó cantinas, colmó las calles. A otras regiones del país llegó también la revuelta. Mientras tanto, los principales jefes liberales fueron a Palacio para hablar con el presidente sobre la difícil situación. Ospina continuó en el mando. Los liberales aceptaron colaborar con él. Varios días permaneció la multitud enardecida, a la deriva. Se diluyó la revuelta en las ciudades. Pero en los campos se extendió la violencia.

Además, la violencia verbal entre los líderes de los partidos tradicionales llegó hasta tal punto que, como decía Alberto Lleras, un discurso en el Parlamento se convertía en muchos muertos en las veredas. O como me dijo el exsenador Daniel Mazuera Gómez (nieto de Laureano), «hubo tanta hostilidad en el lenguaje entre las clases dirigentes de un partido y de otro, que mientras en la ciudad los liberales y los conservadores no se saludaban, en el campo la situación se salió de madre y se pasó del insulto a la puñalada. Por otra parte, el problema se agravó porque los curas tomaron partido por los conservadores, mientras que los liberales eran laicos o estaban cerca

de los masones. Entonces la violencia se volvió una especie de guerra santa».

El país se polarizó, pues, entre gobiernistas conservadores y liberales revoltosos. Durante el período electoral de 1949, los partidos se enfrentaron ferozmente y, como explica monseñor Guzmán Campos, coautor del libro *La Violencia en Colombia*, se utilizó «la política en una campaña de persecución innegablemente pensada y planeada desde las altas esferas del gobierno [...] lo que pronto se tradujo en acción de grupos armados. Gestado así el conflicto, la afloración lógica, inevitable, era el choque, la violencia».

La crisis se agudizó porque Ospina clausuró el Congreso y decretó el estado de sitio. Por ello, el Partido Liberal consideró que no había garantías y se abstuvo de participar en esas elecciones presidenciales en las que fue elegido Laureano Gómez, en comicios que el liberalismo consideró ilegítimos.

## LA VIOLENCIA

Como digo en el prólogo de mi libro *Siembra vientos y recogerás tempestades*, «durante el gobierno de Laureano, miembros de la policía y de los cuerpos de seguridad, principalmente, organizaron una persecución sin precedentes contra los liberales: les arrebataron sus tierras, les incendiaron sus ranchos, les violaron sus mujeres... La Violencia fue creciendo en crueldad: cadáveres acribillados inexorablemente por los llamados pájaros, que señalaban a sus víctimas de antemano; cuerpos mutilados; vientres abiertos de madres gestantes; cadáveres

descompuestos tras el corte de franela; niños abandonados, huérfanos, espectadores en medio de la barbarie».

Después de un año largo de mandato, a Laureano le dio un infarto y le encargó la Presidencia a su ministro Roberto Urdaneta Arbeláez.

Bajo el mando de Urdaneta, la violencia alcanzó dimensiones espeluznantes. Los conservadores incendiaron en Bogotá los diarios liberales *El Tiempo* y *El Espectador*, la sede de la Dirección Liberal Nacional y las casas del expresidente Alfonso López Pumarejo y del futuro presidente Carlos Lleras Restrepo.

Se calcula que en esa época había cerca de 3000 guerrilleros en el Llano comandados por Guadalupe Salcedo, 6000 en el sur del Tolima y 12.000 en Cundinamarca y Antioquia. El Ejército, por su parte, tendría unos 15.000 soldados y la Policía unos 25.000 efectivos.

Fue la guerra a muerte...

Según Urdaneta, las cosas habían sucedido de manera distinta: en su texto *El materialismo contra la dignidad del hombre*, citado en *La violencia en Colombia* por monseñor Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, se había desatado «la persecución de los liberales triunfantes contra los conservadores vencidos, especialmente en los departamentos de Boyacá y Santanderes... Producido el primer ataque de liberales contra conservadores o viceversa, el proceso se desarrollaría automáticamente; vendría entonces el deseo de venganza y quedaría urdida la cadena de la violencia, que después sería imposible de romper».